

signado al servicio de las armas; el escrito de queja; el informe producido por la autoridad responsable; el parecer Fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado; y cuanto mas ha debido verse y tenerse presente. Considerando: que el interesado ha solicitado se le ampare por la Justicia de la Union, por haberlo consignado al servicio de las armas el C. Gefe político, despues de ser aprehendido por la policía y conducido al cuartel de diurnos adonde se le detuviera: que ha justificado cumplidamente, que tuvo lugar el hecho que da motivo á la queja: que habiéndoselo obligado á prestar trabajos sin su consentimiento ha violádose en su perjuicio el art. 5º de la Constitucion. Por cuyas consideraciones; de conformidad al parecer Fiscal, y por no estar comprendido el caso en lo dispuesto por el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869. Se declara: que la Justicia Federal ampara al C. Antonio Villaseñor, contra la determinacion de la Gefatura política por haberlo destinado á cubrir las bajas del ejército. Hágase saber; remítanse copias certificadas de este auto á la direccion del "Semanario Judicial" de la Federacion, y á la del "Diario Oficial" del Gobierno del Estado para su publicacion; y elévese el expediente á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. El C. juez de Distrito definitivamente juzgando lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero*.—Ante mí, *Antonio García Mozqueira*."

Es copia, que certifico y se saca para su insercion en el "Semanario Judicial" de la Federacion. Puebla, Enero 7 de 1873.—*Antonio García Mozqueira*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia

México, Marzo 3 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Anto-

nio Villaseñor, quejándose contra el Gefe político de esa ciudad, porque en Noviembre del año próximo pasado lo consignó al servicio militar; y considerando: que en la época de que se trata no ha estado suspenso el goco de ninguna de las garantías individuales á que se refiere la Constitucion Federal; y que por lo mismo se ha vulnerado en la persona del quejoso obligándole á servir contra su voluntad en el ejército, la á que se refiere el art. 5º de la misma Constitucion, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el seis de Enero último, por el juez de Distrito de Puebla, que declara: que la Justicia Federal ampara al C. Antonio Villaseñor, contra la determinacion de la Gefatura política por haberlo destinado á cubrir las bajas del ejército.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*P. Ordaz*.—*Ignacio Ramirez*.—*J. M. del Castillo Velasco*.—*M. Aza*.—*S. Guzman*.—*Luis Velazquez*.—*M. Zavala*.—*Luis Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 12 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Veracruz, por el C. Crisóforo Márquez, como marido de Dolores Salamanca, contra providencias del C. gefe político de Acayucan, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal, dice: que ha exa-

minado detenidamente este juicio de amparo y proteccion que solicita el C. Crisóforo Márquez, como marido de Dolores Salamanca, y á nombre de la hija natural de esta, Ciria Alvarado, contra una providencia dictada por el C. gefe político del Canton de Acayucan reducida á que el Presidente del municipio de San Juan Evangelista exigiese á dicha Sra. Salamanca que pusiese á su hija en poder de otra persona de honrada y conocida moralidad, cuya providencia, que fué dictada en 21 de Setiembre del año pasado, se llevó á efecto entregándose la menor citada á D^a Juana Manuel Soler de Navarrete, cuyo acto dice el quejoso que ha violado las garantías individuales que conceden á la madre y á la hija los artículos 2, 16 y 21 de la Constitucion Federal, acompañando á su solicitud los respectivos documentos.

Habiendo justificado su personería el representante de la quejosa, se pidió el informe que la ley previene al C. gefe político, el cual lo emitió con la debida justificación, confesando el hecho que motiva este juicio, alegando que no tiene personería el citado Márquez para entablarlo, que no procede la queja y que es dudosa la maternidad de la Sra. Salamanca.

Corrido el traslado correspondiente al suscrito Promotor, debe manifestar que los documentos acompañados al ocurso y los que se adjuntaron al informe, justifican plenamente los hechos en que se apoya el marido de la Sra. Salamanca para solicitar en favor de su mujer y de su hija política amparo y proteccion de los tribunales federales, porque la providencia dictada por la gefatura política viola efectivamente las garantías consignadas en la parte primera del art. 2º y en el 16 de dicha constitucion, respectivamente en la persona de la menor Ciria Alvarado y de la madre de esta, porque la primera la priva de su liber-

tad, poniéndola bajo la autoridad y vigilancia de una persona estraña, y la segunda la molesta en su persona, familia y posesiones sin que sea competente para el efecto, pues aunque se tuviese la medida como providencia precautoria; correspondería dictarla á la autoridad judicial, con arreglo al código de procedimientos del Estado.

Por cuyos fundamentos y con presencia de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la misma Constitucion, fraccion 1ª del art. 1º de la ley orgánica, y demas relativos de 20 de Enero de 1869, pide á vd. se sirva acceder á la solicitud del C. Crisóforo Márquez. H. Veracruz, Enero 10 de 1873.—*Lic. J. M. López de Escalera.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Heróica Veracruz, Febrero 11 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Crisóforo Márquez, como marido de Dolores Salamanca, contra providencias del C. gefe político del Canton de Acayucan que le violan garantías individuales, quitándole á su hija Ciria Alvarado y poniéndola á disposicion de D^a Juana Soler de Navarrete; los documentos que acompañó á su ocurso con que acreditan el acto que se reclama; el juicio verbal que antes tuvo lugar, para que la espresada jóven pasara al poder de la madre en virtud de los derechos que la ley le concedia para reclamarla á su padrino D. Tiburcio Alfaro; el informe que con justificación emitió la enunciada autoridad; el pedimento Fiscal y todo lo demas que ver convino.

Considerando: que está justificado en autos que el C. Crisóforo Márquez es marido legítimo de Dolores Salamanca, y que esta es madre natural de la menor Ciria Alvarado: que hallándose esta al cuidado de su padrino se la reclamó

en juicio ante el C. juez sustituto de primera instancia, quien resolvió que fuera entregada á la madre en virtud de sus derechos naturales y los que le concede el código civil: que posteriormente el C. jefe político del Canton ya mencionado libró una orden al Presidente de la Municipalidad del pueblo de San Juan Evangelista, para que previniese á la quejosa que pusiera á su hija al cuidado de otra persona honrada que le diera educacion y que para ese efecto fueron ambas conducidas á la presencia de la autoridad política, quien llevó á efecto su determinacion entregando dicha menor á D^a Juana Soler de Navarrete: que este hecho viola las garantías que los artículos 2, 16 y 21 de la Constitucion Federal, otorgan á la madre y á la hija, por haber procedido aquella autoridad sin facultades para el efecto, pues en el caso de que hubiera sobrevenido algun motivo justo para que fuese privada D^a Dolores Salamanca de sus legítimos derechos, solo la judicial es competente para conocer y fallar sobre tan delicado asunto, mediante el juicio correspondiente, segun lo prevenido en el Código de procedimientos civiles del Estado: por cuyos fundamentos y en virtud de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Constitucion Federal y ley orgánica de 20 de Enero de 1869, el Juzgado falla.

Primero: La Justicia Federal ampara y protege á Dolores Salamanca y su hija Ciria Alvarado contra las providencias dictadas por el C. jefe político de Acayucan: que han privado á la primera del derecho que tiene de educar y tener á su lado á la segunda.

Segunda: Notifíquese este fallo: publíquese en el "Progreso" de esta ciudad y sáquense las copias que previene la ley para el "Semanario Judicial," elevándose los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así lo mandó y firmó el C. juez de

Distrito del Estado: lo testificamos.—
Lic. Luis I. Gomez.—De asistencia.—
José M. Gonzalez.—*Vicente Simancas.*

Es copia fiel de su original que certifico. Heroica Veracruz, Febrero 15 de 1873.—*Lic. Luis I. Gomez.*—De asistencia.—*José M. Gonzalez.*—*Vicente Simancas.*

EXECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 4 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 26 de Noviembre del año de 1872, promovió en Veracruz ante el juez de Distrito del Estado, Crisóforo Márquez, contra la orden del jefe político del Canton de Acayucan, en virtud de la cual, asienta el promovente que, atropellando los derechos de su esposa Dolores Salamanca, la autoridad referida mandó despojarla de su hija menor de edad Ciria Alvarado para entregarla á Juana Soler de Navarrete, con violacion de las garantías que otorgan los artículos 2, 16 y 21 de la Constitucion Federal. Visto el informe del jefe político del Canton de Acayucan: los documentos justificantes que acompaña: el pedimento del Promotor Fiscal, sosteniendo la procedencia legal del recurso, y atenta la sentencia del juez de Distrito que concede el amparo, por cuanto á que lo actuado establece el hecho sustancial que presentó Márquez en su queja y el derecho justifica la violacion que reclama, pues probado que es madre la Salamanca de la Alvarado, y teniendo como tal los derechos que las leyes le conceden, privarla del que la asiste para tener á su lado á su hija, solo es de la competencia de las autoridades judiciales mediante el juicio respectivo, segun el Código de procedimientos civiles del Estado de Veracruz, aun cuando la providencia de la

separación haya tenido el carácter de precautoria.

Por los fundamentos del juez y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: se confirma la sentencia que aquel pronunció en Veracruz á 11 de Febrero próximo pasado, por la cual declara: que la Justicia Federal ampara y protege á Dolores Salamanca y su hija Ciria Alvarado contra la providencia dictada por el C. jefe político de Acahucan, que ha privado á la primera del derecho que tiene de educar y tener á su lado á la segunda.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó en revisión acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*M. Zuvala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato, por D. Apolinar Quezada, contra el Gefe político de Leon que lo juzgó como plagario y lo condenó á la última pena.

FEDIMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez 1º suplente de Distrito:

El Promotor Fiscal, en el juicio de amparo promovido por Apolinar Quezada, supuesto su estado, que es el de alegar

de buena prueba, dice: que segun el acta del juicio instruido por la autoridad política de Leon, el quejoso fué juzgado y sentenciado como salteador y plagario, comprendido en la ley de 18 de Mayo de 1871, por haber asaltado el 27 de Marzo último al C. Leandio Gutierrez, robándole cuarenta y dos pesos y unas libranzas y habiéndolo reducido á prision. Las pruebas que de este hecho constan en la causa son, respecto del robo del dinero, el dicho del ofendido, cuya prueba siendo como es única, no es suficiente para considerar demostrada la existencia del delito.

En la sentencia de la misma causa se dice despues de definir el delito de plágio, que Quezada no tuvo preso al C. Gutierrez con el objeto de adquirir por su rescate dinero ó cualquiera otra cosa. Esta circunstancia, en concepto del que suscribo, viene á destruir el fundamento de dicha sentencia, porque la prision del C. Gutierrez fué hecha por el quejoso, como él mismo lo dijo en su preparatoria, por considerarlo su enemigo.

El testimonio de la autoridad política de la Villa de la Encarnacion, debe reputarse como el de un testigo cuyo dicho se funda únicamente en informes de otras personas, y por consiguiente es un testigo auricular.

A favor del quejoso existe el testimonio de mas de cinco testigos, personas fidedignas, que dicen que todo el tiempo que estuvo sublevado contra el Supremo Gobierno, observó buena conducta, siendo de notar que entre estas personas está el mismo gefe encargado de su persecucion y el actual Gefe político de Leon.

Las leyes que han suspendido varias garantías individuales para los salteadores y plagarios, suponen la prueba de la existencia de estos delitos para su aplicacion, y no estando plenamente justificado que el quejoso haya sido autor de algunos de estos delitos, el hecho de que

BIBLIOTECA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION